



CERTIFICACIÓN DE ACUERDO RELATIVO A INFORME

Acto que se certifica: Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 30 de octubre de 2019, por el que se ha aprobado el siguiente:

INFORME SOBRE EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CASACIÓN CIVIL VASCA

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 25 de julio de 2019, procedente de la Consejería de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco, tuvo entrada en el Consejo General del Poder Judicial, a efectos de evacuación de informe, el Anteproyecto de Ley de casación civil vasca.

2.- La Comisión Permanente del Consejo, en su reunión de 9 de agosto de 2019, designó Ponentes de este informe a los Vocales Juan Manuel Fernández Martínez y José Antonio Ballesteros Pascual.

II. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA FUNCIÓN CONSULTIVA DEL CGPJ

3.- La función consultiva del Consejo General del Poder Judicial a que se refiere el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene por objeto los anteproyectos de leyes y disposiciones generales que afecten total o parcialmente, entre otras materias expresadas en el citado precepto legal, a «*[n]ormas procesales o que afecten a aspectos jurídico-constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales*», así como a «*normas que afecten a la constitución, organización, funcionamiento y gobierno de los Tribunales*» (apartados sexto y séptimo del artículo 561.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

4.- Atendiendo a este dictado, en aras a una correcta interpretación del alcance y sentido de la potestad consultiva que allí se prevé a favor de este Consejo, y considerado el contenido del Proyecto remitido, el informe que se emite se limitará al examen y alcance de las normas sustantivas o procesales que en él se incluyen específicamente, evitando cualquier consideración sobre cuestiones ajenas al Poder Judicial o al ejercicio de la función jurisdiccional que éste tiene encomendada.



5.- Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.

III.- ESTRUCTURA DEL PROYECTO Y CONSIDERACIONES GENERALES DEL ANTEPROYECTO

6.- El Anteproyecto de Ley de casación civil vasca (en adelante Anteproyecto) consta de una Exposición de Motivos y un Texto articulado, integrado por seis artículos una disposición transitoria y una disposición final.

7.- La Exposición de motivos cumple, en líneas generales, con la función que le es propia, ya que de su tenor se desprende la finalidad y objeto de la futura norma, recoge el título competencial en cuya virtud se acomete la actividad prelegislativa y, de manera detallada, ofrece una explicación sobre el alcance y contenido de las diferentes partes del texto articulado.

8.- Dada la importancia que, como se verá más adelante, en el presente caso revisten las consideraciones que la Exposición de Motivos contiene, se llevará a cabo un análisis detallado sobre los aspectos más sobresalientes de la misma. Tras mencionar las competencias del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, relativas a la unificación de la interpretación del Derecho civil vasco y la importancia que adquiere para la fijación del Derecho Civil, la Exposición de Motivos plantea una importante reflexión: que un cúmulo de circunstancias, entre las que destaca la aplicación de la normativa prevista en la LEC para el recurso de casación, ha dado lugar a una notable restricción del número de asuntos de los que conoce el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, lo cual impide que dicho Tribunal haya podido *«realizar plenamente la función unificadora de la doctrina que a dicho Tribunal se le encomienda»*. Abundando en la anterior idea, el prelegislador vasco concluye que ciertas disposiciones, materias e instituciones forales que *«pese a su limitada valoración económica procesal, son de gran arraigo y conflictividad social en sus respectivos ámbitos»*, no tienen acceso al recurso de casación.



9.- A partir de las premisas expuestas, la Exposición de Motivos recoge de manera explícita cual es la finalidad a alcanzar mediante la innovación normativa que se pretende llevar a cabo. Este objetivo es, lisa y llanamente, incrementar el número de asuntos susceptibles de acceder a la casación autonómica. El aumento del número de asuntos que se pretende alcanzar se fundamenta en la necesidad de incrementar el volumen de resoluciones jurisprudenciales, en aras a lograr la consolidación de la interpretación del Derecho Civil Vasco en el mayor número posible de materias.

10.- A continuación, la Exposición de Motivos desgrana la concreta finalidad que persigue la norma proyectada, señalando que la misma no es otra que procurar el incremento de asuntos susceptibles de recurso de casación, bien sea mediante la supresión de la "summa gravaminis" o a través de la simplificación y flexibilización de la definición del interés casacional como presupuesto de acceso al recurso.

11.- El Texto articulado, cuyo contenido se analizará con detalle en otros apartados, establece cuál es el ámbito objetivo de la regulación contenida en la norma (artículo 1); refiere el alcance de la competencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el conocimiento de los recursos de casación sustanciados ante el mismo; (artículo 2); delimita el motivo del recurso de casación y el tipo de resoluciones recurribles en casación ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (artículo 3); define el concepto de interés casacional a los efectos de la interposición del recurso de casación en materia civil ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (artículo 4); fija las causas de inadmisión del recurso (artículo 5) y establece la aplicabilidad general supletoria, respecto de la regulación contenida en el Anteproyecto, de la LEC (artículo 6). Por último, la Disposición Transitoria se refiere a la aplicación de la normativa contenida en el Anteproyecto a las resoluciones judiciales dictadas antes de su entrada en vigor y la Disposición Final al momento de entrada en vigor de la norma.

IV.- DOCTRINA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE LEGISLACIÓN PROCESAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS.

12.- La iniciativa legislativa objeto del presente informe trae causa de la competencia residual que el artículo 149.1 6º de la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en lo concerniente a la legislación procesal. Dicho precepto atribuye al Estado la competencia exclusiva en la materia



que concierne a la legislación procesal *«sin perjuicio de las necesarias especialidades que de este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas»*. Como punto de partida, se ha de tomar, por tanto, el artículo 149.1.6 de la Constitución, al objeto de desentrañar el alcance y contenido de sus términos. El precepto objeto de cita se enmarca dentro del contexto relativo a la atribución de competencias exclusivas al Estado y, por ello, la materia que concierne a la legislación procesal ha de entenderse reservada al Estado con carácter general, pues sólo excepcionalmente, las Comunidades Autónomas podrán legislar sobre esta materia cuando concurran los siguientes requisitos:

- a) Que la Comunidad Autónoma cuente con derecho sustantivo propio o especial.
- b) Que dicho Derecho sustantivo tenga peculiaridades que denoten una singularidad.
- c) Que la especialidad procesal que se establezca sea necesaria para la salvaguarda de la especificidad del Derecho sustantivo.
- d) Que el Estatuto de autonomía le confiera esta facultad.

13.- El Tribunal Constitucional ha tenido ocasión, en diferentes pronunciamientos, de delimitar los contornos del artículo 149.1.6º. Siguiendo un orden cronológico, la STC 71/82, de 30 de noviembre, al tratar el tema de la generalización de la legitimación colectiva y de la legitimación por sustitución, en el área de defensa del consumidor, consideró que las previsiones, que en tal sentido estatuyó la Ley Vasca 10/81 del Estatuto del Consumidor, no respondían a particularidad alguna del Derecho sustantivo del País Vasco.

14.- La STC 23/88, que analizó la constitucionalidad de determinados artículos de la Ley 3/86 de normalización lingüística de las Islas Baleares, incide también en la necesidad de que cualquier innovación procesal de una norma autonómica, debe de estar vinculada a la necesaria salvaguardia de las peculiaridades del Derecho sustantivo de la Comunidad Autónoma de que se trate.

15.- La STC 121/92, recuerda que las innovaciones procesales establecidas por la legislación autonómica no resultan aceptables por el simple hecho de estar vinculadas con la defensa jurídica de aquellos derechos e intereses que materialmente regulen *«pues con la expresión 'necesarias especialidades' la Constitución tiene en cuenta tan sólo las que inevitablemente se deduzcan, desde el punto de vista de la defensa judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma*



autonómica en virtud de las particularidades del derecho creado por la propia Comunidad».

16.- La sentencia citada entendió que *«de las particularidades del régimen sustantivo y de la especificidad del arrendamiento histórico valenciano no deriva ninguna necesaria especialidad de la ordenación de las vías procesales y de la defensa judicial de los derechos y deberes derivados de esa relación arrendaticia, de manera que la competencia autonómica para legislar sobre estos arrendamientos no conlleva una competencia legislativa de carácter procesal para establecer una regulación singular de ordenación del proceso».*

17.- Esta interpretación del alcance de la competencia autonómica en materia procesal ha sido sostenida también en la STC 21/2012, de 16 de febrero, en relación con el artículo 43.1 del Código de Familia de Cataluña, que posibilitaba la acumulación del procedimiento de división de las cosas comunes junto al de separación, divorcio o nulidad, y que fue considerado no conforme al canon constitucional derivado del artículo 149.1.6ª CE. El Tribunal Constitucional afirmó en esa ocasión lo siguiente:

«[...] el problema que resuelve el art. 43.1 del Código de familia no es exclusivo de Cataluña, ni jurídica ni socialmente. En efecto, si bien puede entenderse que el lugar prioritario o preferente que ocupa la separación de bienes dentro de los posibles regímenes económico-matrimoniales admitidos por el ordenamiento jurídico catalán constituye una particularidad sustantiva, no lo es menos que esos mismos regímenes son los establecidos en el resto de ordenamientos civiles existentes en nuestro Estado plurilegislativo. En consecuencia, no se puede por menos que afirmar que la necesidad de una singular norma procesal que resuelva la división de las cosas comunes en el supuesto de liquidación del régimen de separación de bienes por razón de separación o divorcio se produce con la misma intensidad en el Derecho civil catalán, en los demás derechos civiles especiales o forales y en el Derecho civil común. En suma, la realidad social que viene a atender la norma cuestionada no es distinta de la existente en otros territorios con Derecho civil propio en el que se admite como régimen económico conyugal el de separación de bienes, como tampoco puede afirmarse que la situación de sus destinatarios sería distinta a la de los otros cónyuges sujetos al régimen de separación de bienes en virtud de la aplicación de las normas del Derecho civil común. Y en todos estos casos el Derecho sustantivo se somete a la legislación procesal estatal» (FJ 8)



18.- Asimismo, en la reciente STC 13/2019, de 31 de enero, en relación con la regulación procesal para la resolución de situaciones de sobreendeudamiento introducida por el artículo 3 de la Ley del Parlamento de Cataluña 24/2015, se ha sostenido que:

«[...] el artículo 3 no halla amparo en el artículo 130 EAC, que, de acuerdo con el artículo 149.1.6 CE, atribuye a la Generalitat la aprobación de "las normas procesales específicas que deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña". No hallando cobertura en las competencias estatutarias de la Comunidad Autónoma de Cataluña, el artículo 3 de la Ley 24/2015 invade la competencia general en materia procesal que corresponde al Estado (art. 149.1.6 CE). Tal invasión se produce por la sola razón de que el precepto autonómico regula cuestiones que le están vedadas, con entera independencia de la eventual compatibilidad o incompatibilidad entre la regulación autonómica controvertida y la dictada por el Estado: "las Comunidades Autónomas no pueden establecer disposición alguna al respecto, ni siquiera para reproducir con exactitud las previsiones estatales, operación que quedaría vedada por la doctrina sobre la lex repetita... según la cual la reproducción de normas estatales en normas autonómicas es inconstitucional cuando la Comunidad Autónoma carece de la correspondiente competencia, salvo que —lo que no es el caso— la reiteración de la norma estatal sea imprescindible para el entendimiento del precepto... Salvo esta última excepción, al legislador autonómico le está vedado reproducir la legislación estatal que responde a sus competencias exclusivas. Y, con mayor razón, le está vedado parafrasear, completar, alterar, desarrollar, o de cualquiera otra manera directa o indirecta incidir en la regulación de materias que no forman parte de su acervo competencial" [STC 54/2018, de 24 de mayo, FJ 6 c)].» (FJ 2)

19.- Dada su cercanía con el asunto aquí concernido, la STC 47/2004 debe ser tomada como el referente inmediato, cuya doctrina resulta más fácilmente extrapolable al presente caso. En lo concerniente a la interpretación que debe darse al artículo 149.1.6º de la Constitución, el fundamento jurídico cuarto de la citada sentencia refleja la doctrina consolidada por dicho Tribunal en los términos que a continuación se transcriben:

«La controversia competencial que subyace al presente recurso de inconstitucionalidad no presenta dificultad alguna, a diferencia de lo acaecido en otros procesos de inconstitucionalidad, para el encuadramiento



competencial de la materia concernida. Se trata de la legislación procesal, reservada al Estado como competencia exclusiva en el artículo 149.1.6 , si bien esta reserva no es plena o absoluta, en tanto en cuanto el citado precepto constitucional permite un espacio de normación a las Comunidades Autónomas, al señalar "sin perjuicio de las necesarias especialidades que en este orden (el orden procesal) se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas", salvedad ésta que ha permitido que Galicia haya asumido como competencia exclusiva, en el artículo 27.5 de su Estatuto de Autonomía "las normas procesales y procedimientos administrativos que se deriven del específico Derecho gallego o de la organización propia de los poderes públicos gallegos". Pues bien, acerca del significado y alcance de las fórmulas constitucional y estatutaria de distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas en materia de legislación procesal, y en concreto, sobre la recogida en el mencionado artículo , ha tenido ocasión de pronunciarse este Tribunal Constitucional en diversas resoluciones estableciendo una consolidada doctrina de la que pueden destacarse, a los efectos que a esta controversia interesa, los siguientes criterios: en primer lugar, que la atribución al Estado de la competencia exclusiva sobre legislación procesal responde a la necesidad de salvaguardar la uniformidad de los instrumentos jurisdiccionales [SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 20; 83/1986, de 26 de junio, FJ 2; 173/1998, de 23 de julio, FJ 16 c]; en segundo lugar, que la competencia asumida por las Comunidades Autónomas al amparo de la salvedad recogida en el artículo. 149.1.6 CE no les permite, sin más, introducir en su ordenamiento normas procesales por el mero hecho de haber promulgado regulaciones de Derecho sustantivo en el ejercicio de sus competencias, esto es, innovar el ordenamiento procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos e intereses que materialmente regulen, lo que equivaldría a vaciar de contenido o privar de todo significado a la especificidad con que la materia procesal se contempla en el artículo 149.1.6 CE, sino que, como indica la expresión "necesarias especialidades" del citado precepto constitucional, tan sólo pueden introducir aquellas innovaciones procesales que inevitablemente se deduzcan, desde la perspectiva de la defensa judicial, de las reclamaciones jurídicas sustantivas configuradas por la norma autonómica en virtud de las particularidades del Derecho creado por la propia Comunidad Autónoma, o, dicho en otros términos, las singularidades procesales que se permiten a las Comunidades Autónomas han de limitarse a aquéllas que, por la conexión directa con las particularidades del Derecho sustantivo autonómico, vengán requeridas por éstas (SSTC 71/1982, de 30 de noviembre, FJ 20 ; 83/1986, de 26 de junio, FJ 2 ; 121/1992, de 28 de septiembre, FJ 4 ; 127/1999, de 1 de julio, FJ 5), correspondiendo al legislador autonómico o, en su defecto,



a quienes asuman la defensa de la Ley en su caso impugnada, ofrecer la suficiente justificación sobre la necesidad de alterar las reglas procesales comúnmente aplicables por venir requeridas por las particularidades del Derecho sustantivo autonómico, salvo que del propio examen de la Ley se puedan desprender o inferir esas "necesarias especialidades" (STC 127/1999, de 1 de julio, FJ 5).»

20.- Del conjunto de consideraciones que contiene el fundamento jurídico cuarto de la STC 47/2004, que acaba de transcribirse, merecen destacarse, por su importancia, las siguientes: a) Las singularidades procesales que las Comunidades Autónomas pueden establecer, se limitan a aquéllas que por su conexión directa con las peculiaridades del Derecho sustantivo autonómico vengan requeridas por éstas. b) Compete al legislador autonómico o, en su defecto a quienes asumen la defensa de la Ley en su caso impugnada, ofrecer la suficiente justificación sobre la necesidad de un régimen procesal especial, salvo que del propio examen de la Ley se infiera esa circunstancia.

21.- La exégesis que lleva a cabo el Tribunal Constitucional alumbra un régimen jurídico, en cuya virtud se atribuye a la legislación procesal autonómica un carácter netamente instrumental, que se sustenta en el ineluctable amparo de las peculiaridades o especialidades del Derecho emanado de la Comunidad Autónoma. Solamente en este caso, podrá considerarse legítima la excepción a la aplicación del régimen general, derivado de la asignación al Estado de la competencia exclusiva en materia procesal.

22.- Sin embargo, esta sentencia no se limita a establecer unas pautas o directrices interpretativas del artículo 149.1.6 de la Constitución, pues también lleva a cabo un riguroso análisis sobre una cuestión capital que en el presente caso también se ha de esclarecer, a saber, si el Derecho Civil autonómico presenta particularidades que necesariamente precisan de la creación de un régimen procesal propio.

23.- A tal fin, la STC 47/04 elabora un método de análisis cuyo punto de partida radica en la determinación objetiva de lo que es el Derecho sustantivo (en aquel caso el Derecho Civil Gallego). Posteriormente, avanza hacia la concreción de las peculiaridades de ese Derecho sustantivo y de las especialidades de orden procesal que se establecen respecto de la legislación estatal, para finalmente proceder a desentrañar si las peculiaridades del Derecho sustantivo precisan ineludiblemente de las singularidades procesales que se introducen, todo ello de conformidad con



lo dispuesto en el artículo 149.1.6º de la Constitución. En este apartado, también debe hacerse mención a las prevenciones que la citada sentencia mantiene frente a la reiteración o reproducción de normas procesales de carácter estatal, pues tal y como se refleja en el fundamento jurídico octavo, "la mera reiteración de las reglas procesales generales en la legislación autonómica no hace buena sin más, una tal previsión (sic)", salvo que "la reiteración simplemente consista en incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, determinados preceptos del ordenamiento procesal general con la sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento autonómico".

24.- Como colofón, en lo que a este apartado concierne, cabe afirmar que la mera circunstancia de contar con un Derecho Civil propio no autoriza a establecer especialidades procesales, si éstas no resultan estrictamente necesarias en función de las singularidades de ese Derecho Civil. Pero, aunque concurra esta circunstancia, el artículo 149.1.6º de la Constitución no justifica la elaboración de una norma procesal que ofrezca una regulación en la que, con la finalidad de alcanzar un texto normativo con mayor profusión de detalles, incorpore algunas de las previsiones generales contenidas en la LEC, pues ello solamente se podrá llevar a cabo cuando la referida incorporación tenga por objeto facilitar la comprensión de la norma autonómica. Debe advertirse que el desarrollo de la legislación procesal trae causa del ejercicio de una competencia básicamente estatal y, salvo las especialidades procesales estrictamente necesarias que la Comunidades Autónomas puedan establecer a los fines antes indicados, los preceptos de las LEC rigen en todo el ámbito del Estado, sin necesidad de que la normativa autonómica así lo proclame.

V. EVOLUCIÓN DE LA DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE LA COMPETENCIA CASACIONAL EN MATERIA DE DERECHO CIVIL

25.- La práctica jurisdiccional de las Salas de lo Civil de algunos Tribunales Superiores de Justicia ha venido aceptando y resolviendo los recursos de casación que se interponían contra sentencias de las Audiencias Provinciales radicadas en el territorio, siempre que estuviesen fundados en la infracción de leyes civiles autonómicas y también en la invocada infracción de preceptos de otras leyes autonómicas que, aprobadas por el correspondiente Parlamento autonómico a través de un título competencial distinto, establecían derechos de los ciudadanos en el ámbito del derecho privado.



26.- Así, por ejemplo, en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, se han dictado sentencias en materia de cooperativas (sentencias de 16 de diciembre de 2014, 15 de enero de 2015 y 28 de noviembre de 2017), de caza (sentencia de 7 de noviembre de 2001), de protección a la infancia y la adolescencia (sentencias de 30 de junio de 2016, 30 de enero de 2017, 11 de mayo de 2017 y 16 de enero de 2019).

27.- Esta competencia casacional venía avalada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El auto del TS de 4 de diciembre de 2007 (ponente Xiol Ríos) fijó la competencia de la Sala de lo Civil del TSJ de Galicia para conocer de un recurso de casación por infracción de la legislación gallega de cooperativas. Dicho Auto, tras referirse a precedentes de otros recursos de casación, señaló lo siguiente, *«(...) entiende esta Sala que la Ley de Cooperativas de Galicia no puede ser excluida del concepto de Derecho civil especial propio de dicha Comunidad Autónoma, ya que estamos ante una materia que, sin perjuicio del fundado criterio mantenido por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior Justicia, es regulada por una norma específica de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma y su denuncia se produce en un proceso conocido por un órgano de la jurisdicción civil, lo que justifica que su tratamiento sea el que se halla en el espíritu que ha movido al legislador al establecer la norma competencial contenida en el párrafo segundo del apartado 1 del art. 478 de la LEC, ya que en este precepto se halla la intención de que el Tribunal Superior de Justicia interprete el derecho propio de la Comunidad Autónoma en desarrollo de la función unificadora y nomofiláctica ejercida respecto a los órganos civiles de la Comunidad a través del recurso de casación civil, respecto a una norma de ámbito territorial.»*

28.- Sin embargo, en los últimos años se ha producido una modificación del criterio jurisprudencial expuesto por parte de la Sala Primera del TS, que ha repercutido en las decisiones de las Salas de lo Civil de los TSJ, en los términos que seguidamente se exponen.

29.- El citado cambio de criterio jurisprudencial se remonta a los Autos dictados por la Sala Primera del TS en fechas 3 de marzo de 2015, 20 de mayo de 2015 y 5 de septiembre de 2018, de los cuales el primero y el tercero fueron dictados por el Pleno de la Sala, correspondiendo las ponencias al presidente de la misma, Sr. Marín Castán. El Auto de 5 de marzo de 2018 expresamente cita el anterior de 3 de marzo de 2015 y reitera el criterio allí establecido, configurando jurisprudencia en materia procesal.



30.- Los meritados autos se refieren a la competencia casacional para conocer de un recurso interpuesto por infracción de normas de derecho civil de la legislación gallega, en el primer caso de vivienda y en el segundo de cooperativas. El de 20 de mayo de 2015 aborda la misma cuestión en relación a normas civiles del País Vasco.

31.- El auto de 5 de septiembre de 2018 señala en sus fundamentos segundo y tercero que :«... el factor determinante para la decisión de esta Sala será si las normas autonómicas citadas como infringidas en los motivos del recurso, es decir, los artículos 64, 67 y 60 de la Ley 5/1998, de 18 de diciembre, de Cooperativas de Galicia, constituye o no, en los términos del art. 149.1-8.^a de la Constitución, Derecho civil foral o especial de Galicia o, según los arts. 73.1 a) LOPJ y 478.1 LEC, Derecho civil, foral o especial, «propio» de esa misma Comunidad Autónoma. Conforme al auto del pleno de esta Sala de 3 de marzo de 2015, rec. 121/2014, el criterio más seguro - que ahora se reitera- para responder a esta cuestión es el de la competencia legislativa, de modo que una norma autonómica podrá calificarse de norma de Derecho Civil foral o especial si ha sido aprobada por la asamblea legislativa correspondiente en el ejercicio de la competencia que le atribuye el art. 149.1-8.^a de la Constitución, como sucede, para Galicia, con la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia. Como entonces se razonaba, «de lo anteriormente expuesto se sigue que no toda norma autonómica aplicable para resolver litigios sobre materias de Derecho privado constituye norma de Derecho civil foral o especial, pues las competencias de las comunidades autónomas pueden extenderse, en mayor o menor medida, a materias que guarden relación con el Derecho privado pero que en puridad no integran su Derecho civil propio».

32.- Por su parte, el Auto de 20 de mayo de 2015 precisó *«que no toda norma autonómica aplicable en litigios sobre materias de Derecho privado constituye Derecho civil foral o especial de la comunidad autónoma, como esta Sala ha declarado en el auto de pleno de 3 de marzo de 2015 en recurso 121/2014.»*

VI.- EXAMEN DEL ARTICULADO DEL PROYECTO

33.- El artículo 1 del Anteproyecto establece el ámbito objetivo de la regulación contenida en la norma en los términos siguientes: *«El objeto de la presente Ley es la regulación del Recurso de casación en materia de*



Derecho civil del País Vasco, de conformidad con lo previsto en el artículo 14 del Estatuto de Autonomía para el País Vasco».

34.- El artículo citado se limita a establecer el ámbito objetivo de aplicación del Anteproyecto y, como no podría ser de otro modo, circunscribe su contorno al recurso de casación que haya de conocer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, respecto de aquellos asuntos que se rigen por el ordenamiento jurídico civil vasco.

35.- El mandato que en tal sentido se pretende establecer, se acomoda a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 478.1 de la LEC, el cual prevé *«que corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los Tribunales civil con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto con otros motivos, en infracción de las normas de Derecho Civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución».*

36.- Como es de ver, este precepto no introduce ningún tipo de innovación ni tampoco entra en contradicción con lo dispuesto en la Ley Estatal, pues simplemente delimita el ámbito de aplicación de la norma autonómica, en consonancia con lo previsto por la LEC. No obstante, dada la vocación esencialmente descriptiva del precepto, su contenido contribuye a dotar de sentido al texto articulado.

37.- El artículo 2 del Anteproyecto se refiere al alcance de la competencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el conocimiento de los recursos de casación sustanciados ante el mismo. El precepto consta de dos apartados, el primero de los cuales dispone que *«La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco conocerá, en materia civil, de los recursos de casación que le atribuyan el Estatuto de Autonomía para la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como cualquier otra norma procesal de rango legal».* El apartado segundo añade que *«La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no podrá declinar su competencia para conocer de los recursos de casación que le hayan sido remitidos por la Sala Primera del Tribunal Supremo».*

38.- La competencia para conocer del recurso de casación se ha atribuido tradicionalmente al Tribunal Supremo, pero la existencia de



Derecho civil, foral o especial, propio de algunas comunidades autónomas, ha obligado a distinguir entre la competencia del propio Tribunal Supremo y la que cabe reconocer a determinados Tribunales Superiores de Justicia.

39.- La genuina competencia funcional del Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales (art. 123.1 CE), es la relativa al conocimiento del recurso de casación, que tiene por objeto provocar un examen de la labor de interpretación y aplicación de las normas jurídicas materiales y de la observancia de la jurisprudencia efectuadas por las Audiencias Provinciales en las sentencias dictadas por las mismas en grado de apelación. Ello constituye la esencia de su función: la unificación de la jurisprudencia en la interpretación del Derecho privado común o general del Estado.

40.- No obstante lo anterior, la competencia para conocer del recurso de casación, en su ámbito territorial y en las materias propias del Derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad Autónoma que lo posea, corresponde a la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia. Lógicamente, no todas las Salas de lo Civil y Penal pueden tener atribuida competencia en materia casacional, sino sólo las de aquellas comunidades con Derecho privado propio.

41.- En desarrollo de esa previsión, el artículo 73.1, a) LOPJ atribuye a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia el conocimiento, como Sala de lo Civil, *«de los recursos de casación que establezca la Ley contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas de Derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución»*. Esta previsión estatutaria se contiene, entre otros, en el Estatuto del País Vasco, aprobado por Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, (art. 14), y a ella se alude también en el artículo 478.1, párrafo segundo de la LEC como presupuesto condicionante de dicha atribución de competencia.

42.- No obstante las consideraciones expuestas, los dos apartados del artículo 2 del Anteproyecto vienen a establecer una cláusula competencial a favor del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, lo cual, tal y como se desprende del fundamento jurídico decimoquinto de la STC 47/04, es materia que corresponde en exclusiva al legislador estatal, y, según se recoge en el citado fundamento jurídico, para la introducción de este tipo de reglas, tanto si consisten una mera reiteración de la legislación estatal –



cosa que resulta íntegramente predicable del apartado 2 del artículo, en cuanto el mismo no es sino una reiteración literal del artículo 484.3 de la LEC- como si introducen alguna novedad, el legislador autonómico carece de competencia para promulgarlas, so riesgo de inconstitucionalidad, por lo que, en definitiva, el artículo 2 del anteproyecto debería, sin más, ser suprimido.

43.- El artículo 3 del Anteproyecto establece el motivo del recurso de casación así como las resoluciones recurribles en casación. El apartado primero del artículo dispone que *«El recurso de casación habrá de fundarse, como motivo único, en la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso, siempre que haga referencia a la infracción de normas del Derecho civil, foral o especial propio del País Vasco.»*. El apartado segundo, por su parte, establece que *«Serán recurribles en casación las sentencias y autos definitivos dictados en apelación -por las Audiencias Provinciales cuando actúen cómo tribunal colegiado que presenten interés casacional. Se excluyen, con carácter general, las resoluciones que no pongan fin al proceso, las que tengan carácter incidental o cautelar y las que no impidan un procedimiento posterior con el mismo objeto»*.

44.- En cuanto al apartado primero del artículo, para calibrar si el precepto transcrito lleva a cabo algún tipo de alteración de lo previsto por la norma estatal de carácter procesal, se ha de contrastar su contenido con lo que al respecto establece el segundo inciso del artículo 478.1 de la LEC, cuyo tenor es el siguiente:

«El conocimiento del recurso de casación, en materia civil, corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo. No obstante, corresponderá a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución»

45.- El contraste del artículo 3.1 del Anteproyecto con el tenor del artículo 478.1 LEC revela que la previsión normativa proyectada no es coincidente con lo establecida en la ley procesal estatal, al darse una redacción un tanto confusa que permitiría una lectura ampliadora del ámbito del recurso de casación foral, en la medida que pudiera entenderse



que baste como motivo casacional la infracción de cualquier norma sustantiva aplicable con una mera referencia al derecho civil vasco, lo cual supondría, sin duda, una innovación fuera del alcance de la competencia autonómica ex artículo 149.1.6ª CE. Por ello, dentro de los límites de lo previsto en el artículo 478.1 de la LEC, la formulación del motivo casacional debe redactarse en términos equivalentes, esto es, referidos a la infracción del Derecho civil, foral o especial, propio del País Vasco.

46.- Con todo, y en la medida en que quiera justificarse el enunciado normativo que contiene en las particularidades del Derecho civil vasco y en la necesidad de proyectar sobre el mismo las finalidades de la casación, no resulta ocioso realizar una precisión adicional sobre el pretendido alcance que cabría atribuir a la previsión establecida en el artículo 3.1 del Anteproyecto en relación con el desiderátum que expresa la Memoria Justificativa del mismo cuando señala que el precepto « *adquiere aún una mayor importancia el especificar con mayor precisión y corrección las fuentes del Derecho civil vasco (art. 1 Ley 5/2015), a fin de evitar la interpretación de que solo las infracciones de la Ley 5/2015 pueden motivar el recurso de casación civil vasco, lo qué 'habrá de ser objeto del correspondiente proyecto de Ley, de lo que podríamos llamar "de consolidación del Derecho civil vasco".*». Ello es así por cuanto la expresada intención del prelegislador vasco de «*evitar la interpretación de que solo las infracciones de la Ley 5/2015 pueden motivar el recurso de casación civil vasco*» -y ha de entenderse que a tal finalidad responde la amplia, pero a la vez redundante y confusa, configuración del motivo de impugnación, que habrá de fundarse “en la *infracción de normas aplicables* para resolver las cuestiones objeto del proceso, *siempre que hagan referencia a la infracción de normas de Derecho civil, foral o especial, propio del País Vasco*”- debe cohonestarse con la actual doctrina jurisprudencial establecida por la Sala Primera del Tribunal Supremo que, como ha quedado anotado, acota la posibilidad de revisión en casación de las normas autonómicas precisando que «*no toda norma autonómica aplicable para resolver litigios sobre materias de Derecho privado constituye norma de Derecho civil foral o especial, pues las competencias de las comunidades autónomas pueden extenderse, en mayor o menor medida, a materias que guarden relación con el Derecho privado pero que en puridad no integran su Derecho civil propio*» (Autos del Tribunal Supremo, Sala Primera de 15 de marzo de 2015 y 5 de septiembre de 2018).

47.- Por lo que hace al apartado segundo del precepto, para cotejar si el mismo introduce algún tipo de novedad respecto del régimen jurídico vigente en la LEC, necesariamente se ha de tomar como referencia lo



dispuesto en el artículo 477.2 de la misma, en la redacción dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal, en cuya virtud *«2. Serán recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, en los siguientes casos: 1.º Cuando se dictaran para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución. 2.º Siempre que la cuantía del proceso excediere de 600.000 euros. 3.º Cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, siempre que, en ambos casos, la resolución del recurso presente interés casacional.»*

48.- La LEC limita, por tanto, el objeto del recurso de casación a las *«sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales»* y debe advertirse que la extensión del concepto de «segunda instancia» no es equivalente al de «apelación», que es el empleado en el artículo 3.2 del Anteproyecto. En efecto, el artículo 477.2 LEC limita la recurribilidad en casación a las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, condición que únicamente ostentan las que deciden el recurso de apelación contra la sentencia definitiva que pone fin a la primera instancia tras la tramitación ordinaria del proceso, lo que excluye las sentencias interlocutorias y, en general, las que deciden cuestiones incidentales. Por tanto, en tanto en cuanto no todo recurso de apelación es susceptible de encuadrarse en la categoría conceptual de la segunda instancia, el Anteproyecto al ampliar el ámbito de las resoluciones recurribles incluyendo en el mismo *«las sentencias y autos definitivos dictados en apelación por las Audiencias Provinciales cuando actúen como tribunal colegiado que presenten interés casacional»* (art. 3.2 del Anteproyecto), incurre en un exceso carente de justificación.

49.- La contravención de la regla establecida en el artículo 477.2 de la LEC por parte del precepto anotado del Anteproyecto resulta por tanto palmaria, sin que la posibilidad, jurisprudencialmente admitida, de que sean recurridos en casación los autos que resuelvan recursos en materia de reconocimiento y ejecución de Sentencias extranjeras, al amparo de los Convenios de Bruselas y de Lugano, de 27 de septiembre de 1968 y de 16 de septiembre de 1988, respectivamente, de los Reglamentos CE 1347/2000, de 29 de mayo de 2000 y 44/2001, de 22 de diciembre de 2000, así como del Reglamento CE 2201/2003, de 27 de noviembre de 2003, que deroga al Reglamento CE 1347/2000, del Reglamento UE 1215/2102, de 12 de diciembre de 2012, que sustituye al Reglamento CE 44/2001, y de cualesquiera otras normas de similar naturaleza, cuando la facultad de recurrir se reconozca en el instrumento de ratificación



internacional o en el Reglamento (*Vid.*, entre otros, Auto de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 30 mayo 2018, Recurso de Casación núm. 301/2016 [ECLI:ES:TS:2018:5846]) pueda considerarse enervante de la proscripción de la apertura del recurso de casación autonómica a los «*autos definitivos dictados en apelación por las Audiencias Provinciales cuando actúen cómo tribunal colegiado que presenten interés casacional*» que postula el artículo 3.2 del Anteproyecto sometido a informe. No puede olvidarse que el contenido propio de los autos dictados en procedimientos civiles es el que se expresa en los artículos 245 b) de la LOPJ y 206.1-2º de la LEC, y que tiene una naturaleza esencialmente procesal, por lo que la ampliación de la casación foral a esta clase de resoluciones no puede encontrar su justificación en las particularidades del Derecho civil, foral o especial, vasco, y excede, por tanto, del marco que, conforme a la doctrina constitucional, delimita la competencia autonómica en esta materia. El cauce procesal a través del cual se ha de llevar a cabo la revisión en última instancia, y con la subsiguiente función de interpretación y de unificación, de la aplicación de las normas procesales o con incidencia o virtualidad en el proceso es el recurso extraordinario por infracción procesal, actualmente de la competencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo por mor de lo establecido en la disposición final decimosexta, apartado primero, de la LEC, que queda al margen de la competencia legislativa autonómica que se deriva del artículo 149.1.6º CE en la medida en que no se encuentre justificada por las particularidades del derecho sustantivo de la Comunidad autónoma, como aquí sucede. Como corolario de todo lo anterior se considera conveniente la supresión de la referencia al carácter recurrible de los autos en los términos recogidos en el precepto anotado del Anteproyecto.

50.- En cuanto a la prescripción contenida en el artículo 3.2 del Anteproyecto, que identifica como recurribles las sentencias definitivas «*dictadas en apelación por las Audiencias Provinciales cuando actúen cómo tribunal colegiado que presenten interés casacional*», el juicio sobre su compatibilidad con la regulación general del recurso de casación contenida en la ley rituarial civil debe hacerse abordando, como cuestión previa, la eliminación del requisito de la “*summa gravaminis*” como cauce y límite de acceso al recurso. Llama la atención, no obstante, la contradicción en que parece incurrir la regulación proyectada al eliminar con carácter general la *summa gravaminis*, pero limitar, al mismo tiempo, el recurso a aquellas resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial como órgano colegiado, dejando fuera, por tanto, las dictadas en apelación por un solo magistrado sobre asuntos cuya cuantía no supere los 6.000€ (art. 82 LOPJ).



51.- El artículo 477.2 2º de la LEC establece que el recurso de casación también es procedente contra las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, cuando la cuantía del proceso exceda de 600.000 euros (art. 477.2, 2.º LEC). La determinación de esa cantidad superior a 600.000 euros como límite por debajo del cual no cabe el acceso a la casación se configura en este caso como un requisito para la admisibilidad del recurso. Según la interpretación realizada por el Tribunal Supremo –*vide* Acuerdos del Pleno no jurisdiccional de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 27 de enero de 2017, y el anterior de 30 de diciembre de 2011, así como la STS, Sala Primera (Pleno) 385/2017, de 19 de junio (ECLI:ESTS:2017:385)- sólo serán recurribles en casación con arreglo a este apartado 2.º del artículo 477.2 LEC las sentencias de segunda instancia dictadas en juicio ordinario que esté determinado por la cuantía conforme al artículo 249.2 (no cuando venga determinado por razón de la materia conforme al artículo 249.1) cuando la cuantía del asunto exceda de aquella cifra, quedando excluidas de aquel apartado las dictadas en juicio ordinario de cuantía inferior o indeterminada, así como en el verbal. Las sentencias de apelación dictadas en juicio ordinario que venga determinado por la cuantía (art. 249.2) en los que la cuantía del asunto sea indeterminada o no supere aquella cifra, todas las dictadas en juicio ordinario que venga determinado por razón de la materia (art. 249.1) y, obviamente, todas las dictadas en juicio verbal (tanto si está determinado por la cuantía, pues su tope máximo son 6.000 euros, como si lo está por la materia), no serán recurribles en casación conforme al mencionado artículo 477.2, 2.º, sino, en su caso, conforme al número 3º.

52.- A todo ello hay que añadir que la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo ha introducido cierta flexibilización en relación con la admisibilidad del recurso, abstracción hecha del acierto o desacierto en la invocación por las partes del cauce concretamente elegido –ya sea este el de la cuantía del artículo 477.2.2º o el del interés casacional del artículo 477.2.3º-, sobre la base de la consideración de que *«El acceso a los recursos es cuestión sustraída del poder de disposición de las partes y aun del propio Tribunal, por lo que compete a esta Sala la comprobación de la concurrencia de los requisitos y presupuestos de recurribilidad legalmente establecidos, en base a los criterios que sean efectivamente correctos y procedentes según la norma legal. El carácter excluyente y diferenciado de los cauces de acceso a la casación, establecidos en el artículo 477.2 LEC 2000, implica que los asuntos han de utilizar el que efectivamente corresponda, según el objeto del proceso. Las partes deben acudir al ordinal del artículo 477.2 LEC 2000 que consideren adecuado, pero es lógico que el*



recurso deba superar la fase inicial de la preparación e interposición si se cumplen los requisitos previstos en el ordinal del artículo 477.2 LEC que corresponda. En definitiva el recurso será admitido, aunque no se haga cita del ordinal concreto, cuando se invoque más de uno de los cauces de acceso previstos en el artículo 477.2 o cuando el citado sea erróneo, si la sentencia es recurrible al amparo de uno de ellos y se cumplen en relación al mismo los presupuestos exigibles para superar la fase de admisión. En el presente caso, tal y como se declaró en el auto de admisión a trámite de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal, el contrato respecto de cuya validez y cumplimiento versa la contienda excede de la regulación arrendaticia especial de modo que desde su inicio debió tramitarse en razón de la cuantía, por lo que su acceso a la casación debía realizarse a través del ordinal 2º del artículo 477.2º de la LEC . Al exceder la cuantía del proceso de los 150.000 euros y cumplidos el resto de los presupuestos exigibles, resultó procedente su admisión a trámite a través de este cauce, siendo irrelevante que en el escrito preparatorio se invocase el ordinal 3º del artículo 477.2 de la LEC pudiendo esta Sala, de conformidad con lo anteriormente dicho, reconducir la admisión del recurso a través del cauce adecuado, como ya ha hecho en otras ocasiones (ATS 30 de junio de 2009). [Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil, Sección1ª) núm. 223/2011, de 12 abril, Recurso de Casación núm. 2100/2007. (ECLI: ECLI:ES:TS:2011:2018)]»

53.- Dada la importancia que reviste para el caso, resulta útil aportar a este informe las consideraciones realizadas por el Tribunal Constitucional sobre la procedencia de la eliminación del requisito de la cuantía litigiosa, prevista por la Ley del Parlamento de Galicia 11/93, reguladora del recurso de casación en materia de Derecho Civil especial, en atención a las peculiaridades de este ordenamiento sustantivo. A este respecto, el fundamento jurídico undécimo de la STC 47/2004 ofrece una amplia disertación sobre el carácter fundamentalmente agrario de buena parte de las instituciones del Derecho Civil gallego, con cita expresa de las figuras más señeras. Partiendo de esa realidad, el Tribunal Constitucional entendió que la eliminación del requisito de la "summa gravaminis" se adecuaba al mandato del artículo 146.1.6º de la Constitución, pues así se evitaba que el fielato de la cuantía impidiera la consolidación de una doctrina jurisprudencial en torno a instituciones propias, que en el común de las ocasiones daban lugar a litigios de escasa cuantía. Las consideraciones más destacables del citado fundamento jurídico son las siguientes:

«Por otra parte, adquiere especial relieve, desde la perspectiva de vincular esta especialidad procesal (eliminación o supresión de la cuantía litigiosa



para acceder a la casación foral) al Derecho sustantivo y a sus particularidades ya reseñadas, la función asignada al recurso de casación. Si este medio impugnatorio extraordinario, del que conoce el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, se encamina no solo a tutelar los derechos en juego (ius litigatoris), sino también y esencialmente a la protección de la norma aplicada e interpretada por los Tribunales inferiores, permitiendo así la formación de jurisprudencia y la uniformidad en la aplicación del Derecho civil sustantivo (ius constitutionis), si la casación foral, decimos, persigue o se halla orientada a estas finalidades, la aplicación de la exigencia de una cuantía litigiosa mínima, como requisito para abrir la vía de la casación foral impediría, de facto, la uniformidad en la interpretación y aplicación del Derecho civil de Galicia, con el riesgo consiguiente de criterios dispares de las diversas Audiencias Provinciales del territorio gallego en torno a una misma institución jurídico-privada integrante de su Derecho civil propio, y sin posibilidad efectiva de su unificación por vía de la jurisprudencia emanada de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a través de las Sentencias dictadas en casación.

Hemos de concluir, por ello, que, conforme a la doctrina constitucional que se dejó expuesta, debemos apreciar la existencia de una conexión o vinculación directa entre las particularidades del Derecho civil de Galicia (de sus diversas instituciones integrantes del específico Derecho gallego), y la especialidad procesal establecida por el inciso final del artículo 1 a) de la Ley autonómica impugnada, en cuanto prescribe que son susceptibles de casación las Sentencias pronunciadas por las Audiencias Provinciales de Galicia "cualquiera que sea la cuantía litigiosa", pues esta innovación procesal encuentra adecuada justificación constitucional en la competencia reconocida a dicha Comunidad Autónoma por el artículo 149.1.6 CE, en relación con el artículo. 27.5 de su norma estatutaria, por lo que debemos declarar la constitucionalidad del referido inciso final».

54.- A lo expuesto cabe añadir que diversas Salas de los Tribunales Superiores de Justicia han venido atenuando, desde su constitución, el rigor de la cuantía litigiosa, para hacer posible el acceso a la casación foral de cuestiones que solo a través de la vía del interés casacional pudieron ser resueltas por ellas. Lo cual, de justicia es decirlo, se llevó a cabo sin desconocer el valor de la doctrina jurisprudencial sentada por el Tribunal Supremo en la interpretación de las normas sustantivas comunes y de las procesales (así, sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 23 de octubre [ECLI:ES:TSJNA:2002:1242], 2 de noviembre [ECLI:ES:TSJNA:2002:1312] y 27 de diciembre de 2002 [ECLI:ES:TSJNA:2002:1636], 26 de septiembre de 2003 [ECLI:ES:TSJNA:2003:1295], 21 de enero [ECLI:ES:TSJNA:2004:64] y 2 de



marzo de 2004 [ECLI:ES:TSJNA:2004:308], 15 de mayo de 2006 [ECLI:ES:TSJNA:2006:526], 30 de julio de 2009 [ECLI:ES:TSJNA:2009:25ª] y 22 de julio de 2011[ECLI:ES:TSJNA:2011:219]; sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 14 enero de 2005 [ECLI:ES:TSJBAL:2005:33]; sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 27 de marzo de 2008 [ECLI:ES:TSJCAT:2008:7471]; sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 29 de mayo de 2003 [ECLI:ES:TSJCV:2003:4549]; sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 29 de septiembre de 2001[ECLI:ES:TSJAR:2001:2332]).

55.- Los razonamientos que ofrece la citada sentencia del Tribunal Constitucional dan pie a analizar si la entidad que predica la Exposición de Motivos respecto del Derecho Civil vasco justifica la **supresión** de la “summa gravaminis” a que se refiere el número dos del artículo 477 de la LEC y la consiguiente creación de un régimen procesal diferenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1.6º de la Constitución o, por el contrario, tal pretensión simplemente obedece a la finalidad de extender el ámbito cuantitativo de la llamada casación autonómica, en un afán –en palabras del Tribunal Constitucional- “de innovar el ordenamiento procesal en relación con la defensa jurídica de aquellos derechos e intereses que materialmente regulen, lo que equivaldría a vaciar de contenido o privar de todo significado a la especificidad con que la materia procesal se contempla en el artículo 149.1.6 de la Constitución”. Dicho en otras palabras, lo esencial es, a estos efectos, que la novedad o novedades procesales que se quieren estatuir obedezcan a la necesidad de satisfacer una exigencia ineludible, derivada de las particularidades del Derecho sustantivo vasco.

56.- La Exposición de Motivos no destaca ninguna institución o figura jurídica en particular del Derecho Civil Vasco a estos efectos, más allá de señalar, de una parte, que *«debido a una multitud de causas, son claramente escasos los asuntos que se resuelven [por el TSJ del País Vasco en aplicación e interpretación del Derecho Civil vasco], y su número ha ido decreciendo con el paso del tiempo. Entre dichas causas destaca la falta de adecuación de la normativa contenida en el Capítulo V del Título IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil a las reales necesidades del Derecho civil vasco. Singularmente, la sujeción de la casación civil vasca a las rigurosas exigencias de la general ha venido sustrayendo al enjuiciamiento casacional disposiciones, materias e instituciones forales que, pese, a su limitada valoración económica procesal, son de gran arraigo y conflictividad social en sus respectivos ámbitos, privándolas con su exclusión por la summa*



gravaminis de una jurisprudencia de alcance general»; y, de otra, de realizar una genérica referencia a la necesidad de no impedir «el acceso a la casación de aquellas cuestiones que, no obstante su extraordinaria importancia o el interés casacional que presentan de cara a la interpretación del Derecho civil vasco, pueden ser de escasa o imposible cuantificación económica, como a menudo sucede en materia de derecho de familia».

57.- La eliminación del cauce de la cuantía que supere una determinada “summa gravaminis” contemplado en la LEC –tal y como pretende el Anteproyecto-, y vinculada a una configuración amplia del interés casacional como único cauce de acceso a la casación, es una medida que pretende objetivamente favorecer el aumento de las posibilidades de acceso a la casación de las materias propias de derecho civil vasco.

58.- La STC 47/04 tuvo ocasión de pronunciarse respecto de la eliminación del requisito de la cuantía previsto en el artículo 1 a) Ley 11/1993, de 15 de julio, sobre el Recurso de Casación en materia de Derecho Civil Especial de Galicia. Dicha sentencia estimó que esa medida no era contraria a la Constitución.

59.- El artículo 2 de la Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa, degrada la “summa gravaminis” a tres mil euros y en la Exposición de Motivos de dicha Ley, la rebaja que se cita, al igual que otras medidas adoptadas, se justifica en aras a facilitar la interposición del recurso de casación en el mayor número de litigios. Sin embargo, contra dicha Ley no se interpuso recurso de inconstitucionalidad.

60.- Teniendo en cuenta estas premisas, no sería posible analizar la constitucionalidad de la eliminación del cauce de la cuantía que supere una determinada “summa gravaminis” que lleva a cabo el Anteproyecto, a la luz de la única sentencia del Tribunal Constitucional existente –la referida a la ley gallega-, pues ésta eliminación fue analizada a la vista del ámbito rural predominante del derecho civil gallego. En todo caso, sería necesario plasmar en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, con una mayor concreción, las razones que hacen específicamente necesaria tal medida en atención a las especialidades del derecho civil vasco.

61.- Con todo, no resulta ocioso realizar una llamada a la reflexión del prelegislador vasco sobre el potencial efecto contradictorio que puede tener la eliminación radical del cauce de la cuantía en relación con la confesa voluntad de «dotar al Derecho civil vasco de un acervo suficiente de pronunciamientos judiciales a nivel del Tribunal Superior de Justicia del País



Vasco, que permitan realizar plenamente la función unificadora de la doctrina que a dicho Tribunal se le encomienda» desde la perspectiva de la enervación, que dicha eliminación comporta, de la virtualidad del criterio jurisprudencial –al que anteriormente se ha hecho mención- sobre la admisibilidad de los recursos de casación cuando se cumplan en relación a los mismos los presupuestos exigibles para superar la fase de admisión – por el cauce de la cuantía- y en cambio no sea posible apreciar la concurrencia del interés casacional en los términos que posteriormente se expondrán. Y esta contradicción, en relación con los objetivos y finalidades de la Ley proyectada, se pone tanto más de manifiesto cuanto, como se verá, ha de limitarse el alcance con que el prelegislador quiere configurar el presupuesto del interés casacional, y en la medida en que, limitado ese alcance, al prescindir del cauce de la cuantía, se contrae el acceso a la casación, y por tanto, de la proyección de la función nomofiláctica que le es propia, que se circunscribe a aquellos asuntos que presenten interés casacional, quedando cerrado el acceso por razón de la cuantía, y reduciéndose al menos potencialmente las materias que, siendo propias del Derecho civil, foral y especial, vasco, pueden requerir de la función casacional o aconsejan su tratamiento en sede casacional. Con lo que –y he aquí la paradoja- se produciría el efecto contrario al declaradamente perseguido por el prelegislador, que sirve en esencia de justificación al anteproyecto normativo, que de este modo se vería palmariamente entredicho.

62.- Finalmente, el tenor literal del artículo 3.2 del anteproyecto debe ser objeto de una censura adicional en la medida en que el mismo dispone el carácter recurrible de las sentencias definitivas dictadas en apelación «por las Audiencias Provinciales cuando actúen cómo tribunal colegiado». La justificación de la referencia contenida en el precepto a las Audiencias Provinciales, sin especificar que se trate, solamente, de las radicadas en el País Vasco, no se encuentra en la Exposición de Motivos del Anteproyecto pero sí en la Memoria Justificativa del mismo, suscrita por el Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco. Es en dicha Memoria Justificativa donde se hace constar que *«El artículo se refiere a Audiencias Provinciales en general y no solo del País Vasco, por si algún día se legislase en el sentido que se propuso cuando, allá por 2006, hubo un Proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que establecía la competencia del Tribunal Superior de. Justicia (TSJ) para conocer el Recurso de casación cuando se tratase de Derecho civil propio, aunque el órgano a quo estuviese localizado fuera de la correspondiente Comunidad Autónoma, en tanto da una mayor homogeneidad a la jurisprudencia, aunque no dejaba de ser una novedad significativa que*



obviase los criterios territoriales en la atribución de competencias, ya que las Salas de lo Civil del TSJ la extenderían, en determinadas materias, a todo el territorio nacional».

63.- La mera lectura de la justificación ofrecida permite adverar la incompatibilidad de la genérica referencia a las "Audiencias Provinciales" - sin especificar que se trata exclusivamente de las radicadas en el País Vasco- como órganos jurisdiccionales de los que pueden emanar las sentencias definitivas y firmes susceptibles de ser recurridas en casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por elementales razones competenciales, por lo que, también en este punto, la redacción del precepto anotado deberá ser revisada. La redacción propuesta pugna abiertamente con lo dispuesto en el artículo 73.1 a) de la LOPJ y, por consiguiente, con el marco de atribución competencial que en él se establece, incidiendo por ende en el ámbito competencial de la ley orgánica, y excede del marco que, conforme al criterio constitucional, delimita la competencia autonómica prevista en el artículo 149.1.6º CE.

64.- El artículo 4 del Anteproyecto establece, como acaba de adelantarse, los supuestos en los que, a los efectos del recurso de casación civil autonómico proyectado, debe considerarse que un recurso presenta interés casacional, disponiendo literalmente lo siguiente: *«Se considerará que un recurso presenta interés casacional en los siguientes casos: 1. Cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dictada en aplicación de normas del Derecho civil vasco. 2. Cuando la sentencia recurrida se oponga, .en tanto en cuanto pudiera aún resultar vigente, a aquella doctrina histórica que, de forma reiterada, hubieran establecido las resoluciones firmes de todos aquellos tribunales a los que, con anterioridad a la creación y puesta en funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como órgano encargado de culminar la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, correspondiera jurisdicción para resolver los recursos presentados contra las sentencias de jueces y tribunales radicados en el País Vasco y unificar la doctrina que de estas emanase en materia de Derecho- civil foral propio de los Territorios Históricos que integran el País Vasco. 3. Cuando la sentencia recurrida resuelva una cuestión sometida a la normativa del Derecho civil vasco de las que no exista doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, sea esta relativa a la propia ley o de normas anteriores de igual o similar contenido. 4. Cuando la parte recurrente justifique debidamente la necesidad de modificar la doctrina ya establecida en relación- con el problema jurídico planteado porque hayan evolucionado la*



realidad social del tiempo en el que la norma invocada han de ser aplicada o la común opinión de la comunidad jurídica sobre el modo en que la aplicación de la norma ha de atender en última instancia a su espíritu y finalidad»

65.- Previamente a valorar la trascendencia de las novedades que se derivan del precepto analizado, procede llevar a cabo un somero análisis del régimen jurídico que se extrae de los ordinales segundo y tercero del artículo 477 de la LEC, tanto para la casación ordinaria o general como para la casación autonómica.

66.- El número dos del artículo 477 establece que únicamente serán recurribles en casación las sentencias de las Audiencias Provinciales dictadas en segunda instancia, siempre que concurran una serie de requisitos adicionales. Estos requisitos son los siguientes: a) Que las sentencias versen sobre la tutela judicial civil de los derechos fundamentales de carácter sustantivo. En la actualidad, de conformidad con la disposición final decimosexta de la LEC, también cabe invocar la vulneración del artículo 24 de la Constitución. Según aclara la doctrina jurisprudencial, no basta con que tangencialmente se mencione algún derecho fundamental, ya que es preciso que su tutela haya constituido el objeto nuclear del pleito. b) El recurso de casación también es procedente, como se ha visto, contra las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales, cuando la cuantía del proceso exceda de 600.000 euros (art. 477.2, 2.º LEC). c) o que, cuando la cuantía del proceso no excediere de 600.000 euros o este se haya tramitado por razón de la materia, la resolución del recurso presente interés casacional.

67.- La existencia de interés casacional está delimitada por la propia Ley de ritos y será de apreciar en los siguientes casos: 1. Cuando la sentencia recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Se entenderá cumplido este requisito cuando se citen dos o más sentencias del Tribunal Supremo y se razone de manera suficiente sobre la vulneración de dicha doctrina. 2. Cuando se resuelvan puntos o cuestiones sobre los que exista jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales. Básicamente, según criterio establecido por la Junta General antes indicada, es necesario que al menos dos sentencias firmes hayan resuelto en sentido contrario al contenido del fallo de otras dos sentencias, igualmente firmes, dictadas por distintas Audiencias Provinciales o por Secciones de las mismas o distintas Audiencias. Las sentencias que se invoquen han de versar sobre controversias sustancialmente iguales y deberá razonarse sobre la materia en la que concurre contradicción. 3.



Cuando se apliquen normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que no exista doctrina jurisprudencial asentada respecto de normas anteriores de igual o similar contenido. El “dies a quo” se fija en atención a la fecha de entrada en vigor de la norma y el “dies a quem” coincide con la fecha en la que se dicte la sentencia recurrida.

68.- Debe añadirse que en base al interés casacional, sólo tienen acceso a este recurso las sentencias dictadas en juicios cuya cuantía no exceda de 600.000 euros, las dictadas en juicios ordinarios y verbales tramitados por razón de la materia, las recaídas en los procesos especiales a que se refiere el Libro IV de la LEC, así como las resoluciones dictadas en materia de reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, en los términos que se deriven de los instrumentos internacionales.

69. -En lo que concierne al particular régimen jurídico previsto para el recurso de casación del que deben conocer los Tribunales Superiores de Justicia, se ha de significar que, de conformidad con la literalidad del segundo párrafo del artículo 477.3 de la LEC, el interés casacional también se extiende a aquellos casos en los que, bien no existe doctrina del Tribunal Superior de Justicia sobre normas del Derecho especial de la Comunidad Autónoma, bien la sentencia recurrida es contraria a dicha doctrina.

70.- Teniendo en cuenta las anteriores premisas, a modo de apunte y sin perjuicio de un desarrollo más prolijo, las novedades que el artículo 4 del Anteproyecto pretende introducir son: a) La eliminación del requisito de la antigüedad de la norma a que se refiere el artículo 477.3 de la LEC, si bien ello no comporta incidencia práctica real alguna como se explicitará más adelante. b) El reconocimiento del interés casacional de la eventual contradicción de la sentencia recurrida con la doctrina jurisprudencial de todos aquellos tribunales a los que, con anterioridad- a la creación y puesta en funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco como órgano encargado de culminar la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, correspondiera jurisdicción para resolver los recursos presentados contra las sentencias de jueces y tribunales radicados en el País Vasco (artículo 4.2 del Anteproyecto). c) El reconocimiento del interés casacional del debate jurídico suscitado cuando *«la parte recurrente justifique debidamente la necesidad de modificar la doctrina ya establecida en relación con el problema jurídico planteado porque hayan evolucionado la realidad social del tiempo en el que la norma invocada han de ser aplicada o la común opinión de la comunidad jurídica sobre el modo en que la aplicación de la norma ha de atender en última instancia a su espíritu y finalidad»* (artículo 4.4 del Anteproyecto).



71.- En cambio, las reglas estatuidas en los apartados 1 y 3 del artículo 4 del Anteproyecto, no constituyen, en rigor, verdaderas novedades respecto de la regulación contenida en la LEC, sino meras concreciones de la prescripción establecida en el inciso segundo del artículo 477.3. La mera reiteración de reglas procesales generales en la legislación autonómica no hace buena, sin más, una tal previsión (SSTC 71/1982, FJ 20; STC 173/1998, FJ 16). Esta proscripción de la reiteración o reproducción de normas procesales por el legislador autonómico (*leges repetitae*) no debe, sin embargo, extenderse a aquellos supuestos en que la reiteración simplemente consista en incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, determinados preceptos del ordenamiento procesal general con la sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento autonómico (STC 47/2004, FJ 8).

72.- Así las cosas, la proyección de la doctrina constitucional a que acaba de hacerse referencia lleva a concluir que la dirección seguida por el Anteproyecto en este aspecto no se opone a los parámetros establecidos por la doctrina constitucional para validar las prescripciones establecidas por la norma autonómica en los apartados 1 y 3 del artículo 4 del Anteproyecto.

73.- Volviendo ahora sobre las innovaciones derivadas de las previsiones que contiene el artículo 4 del Anteproyecto en relación con el régimen general contenido en la LEC, procede a analizar, a la luz de la doctrina constitucional a que se viene haciendo mención, si el peculiar régimen procesal que se pretende instaurar encuentra justificación en las singularidades del Derecho Civil vasco, hasta el extremo de constituir una "necesaria especialidad".

74.- Tal y como se deduce de la Exposición de Motivos, las novedades se vinculan al desiderátum de alcanzar un mayor volumen de recursos de casación a resolver el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, y, de ese modo, favorecer la consolidación de la doctrina jurisprudencial mediante la confirmación o modificación de la preexistente. Asimismo, la Exposición de Motivos contiene una particular mención a la eliminación del plazo de vigencia de la norma que contempla la LEC, pues considera que, *«dada la hasta ahora escasa producción normativa en materia de derecho civil vasco»*, procede descartar *«que el tiempo de vigencia de la norma con relación a la cual se alega la falta de jurisprudencia impida el acceso a la casación.»*



75.- Procede pues analizar, en primer lugar, la eliminación del requisito de la antigüedad de la norma al que se refiere el tercer inciso del artículo 477.3 de la LEC. Este apartado merece un análisis diferente pues, como ya se ha puesto de manifiesto en anteriores pasajes, cuando la sentencia recurrida en casación aplique normas cuyo periodo de vigencia no supere los cinco años quedará justificado el interés casacional, siempre que no exista doctrina del Tribunal Supremo relativa a normas anteriores, de igual o similar contenido. Este requisito, estatuido para aquellos recursos de casación de los que deba conocer el Tribunal Supremo, se ha de entender matizado por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 477.3 de la LEC, que en concreto disciplina las peculiaridades del interés casacional cuando el recurso de casación verse sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma y, en consecuencia, del mismo deban de conocer los Tribunales Superiores de Justicia.

76.- El párrafo citado alude expresamente –como justificación del interés casacional- al hecho de que no exista doctrina del Tribunal Superior de Justicia sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma, sin añadir ningún tipo de condicionante o aditamento relativo a la antigüedad de la norma presuntamente infringida.

77.- Este dato permite afirmar que las previsiones del párrafo segundo del artículo 477.3 de la LEC configuran un supuesto adicional, que es susceptible de fundamentar un interés casacional dotado de autonomía frente al párrafo primero del citado número y artículo. Por esa razón, la mera ausencia de doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia siempre justificará la existencia de interés casacional, con independencia del lapso temporal de vigencia de la norma especial de la Comunidad autónoma que resulte aplicable.

78.- Estas observaciones dan pábulo a considerar que la eliminación del requisito temporal que establece el artículo 477.3, primer párrafo, no supone novación alguna respecto de la normativa prevista en la propia LEC. La tesis que se hace valer queda también corroborada por lo dispuesto en el artículo 483.3º, párrafo segundo de la LEC, que a diferencia de lo previsto en el párrafo primero, no efectúa mención alguna a la antigüedad de la norma infringida, habida cuenta que se limita a contemplar, como motivo de inadmisión del recurso de casación del que debe de conocer el Tribunal Superior de Justicia, el hecho de que el citado Tribunal haya sentado doctrina sobre la norma discutida o sobre otra anterior de contenido igual o similar.



79.- Todas estas razones determinan que el hecho de que, como señala la Exposición de Motivos del Anteproyecto, la regulación del interés casacional efectuada en el artículo 4 del Anteproyecto se haya efectuado *«descartando que el tiempo de vigencia de la norma con relación a la cual se alega la falta de jurisprudencia impida el acceso a la casación»* no merezca tacha alguna.

80.- El apartado segundo del artículo 4 del Anteproyecto utiliza una fórmula ciertamente alambicada para establecer el reconocimiento del interés casacional de aquellos recursos en los que se invoque la contradicción existente entre los pronunciamientos de la sentencia controvertida y la doctrina jurisprudencial vigente emanada de tribunales que ejercieron jurisdicción -respecto de las instituciones del Derecho civil, foral o especial, del País vasco- con anterioridad a la asunción de la competencia sobre tal materia por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

81.- La regla que se establece mediante este precepto pretende, según lo argumentado en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, favorecer la consolidación de la doctrina jurisprudencial mediante la confirmación o modificación de la preexistente. Ahora bien, esta disposición encierra una especialidad procesal que conduce a ampliar el ámbito de la casación foral a través de la ampliación de los elementos que sirven para configurar el interés casacional sin que se encuentre debidamente justificada por las particularidades del Derecho civil, foral o especial, vasco. La definición del interés casacional ha de gravitar ineludiblemente, de una parte, en torno al derecho material, foral o especial, aplicado o aplicable para resolver la cuestión objeto de litigio vigente al tiempo en que fue promulgada la Constitución, de cuyo artículo 149.1.8º se deriva la competencia autonómica en materia de legislación civil; y de otra parte, en torno a la doctrina jurisprudencial invocable para integrar el interés casacional que sirve de acceso a la casación, que, como tal doctrina jurisprudencial, ha de emanar de aquellos órganos jurisdiccionales que legalmente, y conforme a la configuración de la LOPJ, tienen atribuida la competencia en materia casacional, esto es, las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia respecto de los recursos de casación contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esa atribución [artículo 73.1 a) LOPJ]. Adicionalmente, debe señalarse que la posibilidad



de alegar como doctrina jurisprudencial de contraste las sentencias dictadas por distintos tribunales, ya pretéritos, parece un contrasentido con la idea misma de interés casacional, que pretende garantizar la seguridad jurídica y la igualdad en la aplicación de la Ley a través de la unívoca interpretación de la ley sustantiva, lo que comporta, necesariamente, la unicidad del órgano jurisdiccional de la doctrina invocable, esto es, como se ha dicho, la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia.

82.- Finalmente, el apartado cuarto del artículo 4 del Anteproyecto, pretende el reconocimiento de potencial interés casacional al debate jurídico suscitado cuando *«la parte recurrente justifique debidamente la necesidad de modificar la doctrina ya establecida en relación- con el problema jurídico planteado porque hayan evolucionado la realidad social del tiempo en el que la norma invocada han -sic- de ser aplicada o la común opinión de la comunidad jurídica sobre el modo en que la aplicación de la norma ha de atender en última instancia a su espíritu y finalidad»*.

83.- La contravención entre el precepto analizado y los términos en los que el presupuesto del interés casacional es configurado en el particular régimen jurídico previsto para el recurso de casación del que deben conocer los Tribunales Superiores de Justicia, establecido en el segundo párrafo del artículo 477.3 de la LEC, resulta palmaria, toda vez que, de la literalidad de la norma anotada se desprende que, más allá del reconocimiento de interés casacional a aquellos casos en los que o bien no existe doctrina del Tribunal Superior de Justicia sobre normas del Derecho especial de la Comunidad Autónoma o la sentencia recurrida es contraria a dicha doctrina, el prelegislador vasco pretende, con la redacción dada al apartado cuarto del artículo 4 del Anteproyecto, hacer posible la admisión de recursos de casación en los que se planteen tesis contrarias a las sustentadas por la doctrina jurisprudencial vigente y pacífica establecida por el propio Tribunal Superior de Justicia en la interpretación y aplicación del Derecho Civil vasco, lo que supone, de facto, pretender configurar el recurso de casación del que debe conocer el Tribunal Superior de Justicia del País vasco mediante un sistema de avocación o *certiorari*, y, en fin, como una suerte de tercera instancia, desconociendo la función exclusivamente nomofiláctica que es propia del recurso de casación. Todo lo cual, en suma, supone articular previsiones normativas que contienen especialidades no justificadas por las particularidades que caracterizan el derecho sustantivo autonómico, y al margen, por consiguiente, de los parámetros constitucionales conforme a los cuales se configura la competencia legislativa autonómica en materia procesal que se deriva del artículo 149.1.6º CE.



Por las razones expuestas el apartado cuarto del artículo 4 del Anteproyecto debe ser suprimido.

84.- El artículo 5 del Anteproyecto, bajo la rúbrica "Inadmisión del recurso" dispone que *«Además de en aquellos casos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, procederá la inadmisión del recurso de casación: 1º Si el recurso fuera improcedente, por no ser recurrible la sentencia o por cualquier otro defecto de forma no subsanable. 2º. Si el escrito de interposición del recurso no cumpliese los requisitos establecidos, para los distintos casos, en esta Ley o en la Ley de Enjuiciamiento Civil. 3º, Si no existiere interés casacional en los términos previstos en esta Ley. 4º. Si el recurso careciere manifiestamente de fundamento o se hubiesen resuelto ya en el fondo otros recursos sustancialmente iguales. 5º. En el supuesto del apartado 4 del artículo anterior, cuando la Sala estime que no procede un cambio de la doctrina por no concurrir los supuestos legalmente previstos»*

85.- También en este caso, para calibrar si el precepto transcrito lleva a cabo algún tipo de alteración de lo previsto por la norma estatal de carácter procesal, se ha de contrastar su contenido con lo que al respecto establece el artículo 483.2 de la LEC, cuyo tenor es el siguiente: *«Procederá la inadmisión del recurso de casación: 1.º Si el recurso fuera improcedente, por no ser recurrible la sentencia o por cualquier otro defecto de forma no subsanable. 2.º Si el escrito de interposición del recurso no cumpliese los requisitos establecidos, para los distintos casos, en esta Ley. 3.º Si el asunto no alcanzase la cuantía requerida, o no existiere interés casacional por inexistencia de oposición a doctrina jurisprudencial, por falta de jurisprudencia contradictoria o si la norma que se pretende infringida llevase vigente más de cinco años o, a juicio de la Sala, existiese doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo sobre dicha norma o sobre otra anterior de contenido igual o similar. Asimismo se inadmitirá el recurso en los casos del segundo párrafo del artículo 477.3, cuando el Tribunal Superior de Justicia correspondiente considere que ha sentado doctrina sobre la norma discutida o sobre otra anterior de contenido igual o similar. 4.º Si el recurso careciere manifiestamente de fundamento o se hubiesen resuelto ya en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.»*

86.- El contraste entre el artículo 483.2 de la LEC y el artículo 5 del Anteproyecto permite advenir que las reglas estatuidas en los subapartados 1º a 4º del artículo 5 del Anteproyecto –excepción hecha de la supresión de la referencia a la cuantía requerida como corolario de la eliminación de la *summa gravaminis* que lleva a cabo la norma autonómica-, no constituyen verdaderas novedades respecto de la regulación contenida en la LEC, a pesar de la afirmación efectuada en el inciso primero del precepto anotado, sino meras reiteraciones de las prescripciones establecidas en el artículo



483.2 de la ley rituarial general. Ello es así por cuanto los subapartados 1º a 4º del artículo 5 del Anteproyecto, de una parte, no suponen novación alguna respecto de la normativa prevista en la propia LEC: su relevancia y virtualidad se explican únicamente desde el contenido que la ley proyectada quiere atribuir al motivo de casación, a las resoluciones recurribles y al cauce de acceso a la casación –el interés casacional–; pero las consideraciones que con anterioridad se han hecho respecto de tales aspectos han de tener necesariamente incidencia en estos subapartados del artículo 5, en orden a concluir con su falta de justificación conforme a los parámetros constitucionales que vienen aplicándose. Y de otra parte, porque no contribuyen a clarificar, en términos que puedan reputarse necesarios, la aplicación en el ámbito del Derecho Civil vasco de las prescripciones generales establecidas en la ley procesal civil sobre los motivos de inadmisión predicables de los recursos de casación de los que deba conocer el Tribunal Superior de Justicia, por lo que la proyección de la doctrina constitucional a la que se viene haciendo referencia en este informe aconsejaría la supresión de estos apartados.

87.- El subapartado 5º del artículo 5 del Anteproyecto, por su parte, establece un supuesto singular de inadmisión directamente vinculado a la prescripción establecida en el apartado cuarto del artículo 4 del Anteproyecto, cuya supresión se postula en este informe, por lo que su eliminación del texto del Anteproyecto deviene asimismo ineluctable.

88.- El artículo 6 del Anteproyecto dispone que «En todo lo no regulado en la presente Ley sigue siendo de aplicación como norma procesal general lo establecido para el recurso de casación en la Ley de Enjuiciamiento Civil». La redacción del precepto sugiere una reflexión sencilla que engarza algunas de las consideraciones expuestas en este informe: las disposiciones de la LEC son operativas sin necesidad de que la norma autonómica reafirme su aplicación al caso, máxime cuando, tal y como aquí ocurre, la previsión del artículo 6 del Anteproyecto no surge de la necesidad de esclarecer o hacer inteligible el texto del precepto, y además introduce una suerte de supletoriedad que no es conciliable con el modelo de distribución de competencias que se deriva del artículo 149.1.61 CE, como advirtió el Tribunal Constitucional en su sentencia 47/2004, de continua referencia (F J 17), por lo que resultaría igualmente aconsejable su supresión o, al menos, su reformulación.

89.- Por último el Anteproyecto incorpora una Disposición transitoria en cuya virtud « Serán recurribles en casación,- con arreglo a lo dispuesto en la presente ley, las resoluciones judiciales que, dictadas antes de su



entrada en vigor, se encuentren en tiempo hábil de ser recurridas.»; y una Disposición final, por mor de la cual, « La presente ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco» que se limitan a establecer un criterio general de aplicación intertemporal de la norma proyectada y a precisar el momento de la efectiva entrada en vigor de la misma.

VI.- CONCLUSIONES

PRIMERA.- El artículo 1 del Anteproyecto establece el ámbito objetivo de la regulación contenida en la norma. El artículo citado se limita a establecer el ámbito objetivo de aplicación del Anteproyecto y, como no podría ser de otro modo, circunscribe su contorno al recurso de casación que haya de conocer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, respecto de aquellos asuntos que se rigen por el ordenamiento jurídico civil vasco.

Este precepto no introduce ningún tipo de innovación ni tampoco entra en contradicción con lo dispuesto en la Ley Estatal, pues simplemente delimita el ámbito de aplicación de la norma autonómica, en consonancia con lo previsto por la LEC. No obstante, dada la vocación esencialmente descriptiva del precepto, su contenido contribuye a dotar de sentido al texto articulado.

SEGUNDA.- El artículo 2 del Anteproyecto se refiere al alcance de la competencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación con el conocimiento de los recursos de casación sustanciados ante el mismo. Los dos apartados del artículo 2 del Anteproyecto vienen a establecer una cláusula competencial a favor del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, lo cual, tal y como se desprende del fundamento jurídico decimoquinto de la STC 47/04, es materia que corresponde en exclusiva al legislador estatal, y, según se recoge en el citado fundamento jurídico, para la introducción de este tipo de reglas, tanto si consisten una mera reiteración de la legislación estatal –cosa que resulta íntegramente predicable del apartado 2 del artículo, en cuanto el mismo no es sino una reiteración literal del artículo 484.3 de la LEC- como si introducen alguna novedad, el legislador autonómico carece de competencia para promulgarlas, so riesgo de inconstitucionalidad, por lo que, en definitiva, el artículo 2 del anteproyecto debería, sin más, ser suprimido.



TERCERA.- El artículo 3 del Anteproyecto establece el motivo del recurso de casación así como las resoluciones recurribles en casación. El apartado primero del artículo no innova ni modifica la regulación establecida en el artículo 478.1 de la LEC, lo cual aboga en favor de su eliminación. La anterior conclusión se ve reforzada, además, por la proyección al caso de la doctrina jurisprudencial contenida en los Autos del Tribunal Supremo, Sala Primera de 15 de marzo de 2015 y 5 de septiembre de 2018.

Por lo que hace al apartado segundo del artículo, la simple lectura del precepto evidencia la incompatibilidad de la regla que pretende establecer el prelegislador vasco con la prescripción establecida al efecto en la LEC, toda vez que, mientras el artículo 477.2 constriñe el ámbito de la recurribilidad en casación a «*las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales*» –no todas, sino sólo las subsumibles en los supuestos que el precepto detalla a continuación-, el artículo 4.2 del Anteproyecto, en cambio, amplía el ámbito de las resoluciones recurribles incluyendo en el mismo «*las sentencias y autos definitivos dictados en apelación por las Audiencias Provinciales cuando actúen como tribunal colegiado que presenten interés casacional*». No puede olvidarse que el contenido propio de los autos dictados en procedimientos civiles es el que se expresa en los artículos 245 b) de la LOPJ y 206.1-2º de la LEC, y que tiene una naturaleza esencialmente procesal, por lo que la ampliación de la casación foral a esta clase de resoluciones no puede encontrar su justificación en las particularidades del Derecho civil, foral o especial, vasco, y excede, por tanto, del marco que, conforme a la doctrina constitucional, delimita la competencia autonómica en esta materia.

CUARTA.- La prescripción contenida en el artículo 3.2 del Anteproyecto plantea igualmente la cuestión de la eliminación del requisito de la “summa gravaminis” como cauce y límite de acceso al recurso. No resulta posible analizar la constitucionalidad de la eliminación del cauce de la cuantía que supere una determinada “summa gravaminis” que lleva a cabo el Anteproyecto, a la luz de la única sentencia del Tribunal Constitucional existente –la referida a la ley gallega-, pues ésta eliminación fue analizada a la vista del ámbito rural predominante del derecho civil gallego. En todo caso, sería necesario plasmar, en la Exposición de Motivos del Anteproyecto, con una mayor concreción, las razones que hacen específicamente necesaria tal medida en atención a las especialidades del derecho civil vasco.

Con todo, no resulta ocioso realizar una llamada a la reflexión del prelegislador vasco sobre el potencial efecto contradictorio que puede tener



la eliminación radical del cauce de la cuantía en relación con la confesa voluntad de *«dotar al Derecho civil vasco de un acervo suficiente de pronunciamientos judiciales a nivel del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que permitan realizar plenamente la función unificadora de la doctrina que a dicho Tribunal se le encomienda»* desde la perspectiva de la enervación, que dicha eliminación comporta, de la virtualidad del criterio jurisprudencial que postula la admisibilidad de los recursos de casación cuando se cumplan, en relación a los mismos, los presupuestos exigibles para superar la fase de admisión –por el cauce de la cuantía- y en cambio no sea posible apreciar la concurrencia del interés casacional. Esta contradicción, en relación con los objetivos y finalidades de la Ley proyectada, se pone tanto más de manifiesto cuanto ha de limitarse el alcance con que el prelegislador quiere configurar el presupuesto del interés casacional, y en la medida en que, limitado ese alcance, al prescindir del cauce de la cuantía, se contrae el acceso a la casación, y por tanto, de la proyección de la función nomofiláctica que le es propia, que se circunscribe a aquellos asuntos que presenten interés casacional, quedando cerrado el acceso por razón de la cuantía, y reduciéndose al menos potencialmente las materias que, siendo propias del Derecho civil, foral y especial, vasco, pueden requerir de la función casacional o aconsejan su tratamiento en sede casacional. Con lo que –y he aquí la paradoja- se produciría el efecto contrario al declaradamente perseguido por el prelegislador, que sirve en esencia de justificación al anteproyecto normativo, que de este modo se vería palmariamente en entredicho.

QUINTA.- El tenor literal del artículo 3.2 del anteproyecto debe ser objeto de una censura adicional en la medida en que el mismo dispone el carácter recurrible de las sentencias definitivas dictadas en apelación *«por las Audiencias Provinciales cuando actúen como tribunal colegiado»*. La genérica referencia a las “Audiencias Provinciales” -sin especificar que se trata exclusivamente de las radicadas en el País Vasco- como órganos jurisdiccionales de los que pueden emanar las sentencias definitivas y firmes susceptibles de ser recurridas en casación ante la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco pugna abiertamente con lo dispuesto en el artículo 73.1 a) de la LOPJ y, por consiguiente, con el marco de atribución competencial que en él se establece, incidiendo por ende en el ámbito competencial de la ley orgánica, y excede del marco que, conforme al criterio constitucional, delimita la competencia autonómica prevista en el artículo 149.1.6º CE.



SEXTA.- El artículo 4 del Anteproyecto establece los supuestos en los que, a los efectos del recurso de casación civil autonómico proyectado, debe considerarse que un recurso presenta interés casacional. Las reglas estatuidas en los apartados 1 y 3 del artículo 4 del Anteproyecto no constituyen, en rigor, verdaderas novedades respecto de la regulación contenida en la LEC, sino meras concreciones de la prescripción establecida en el inciso segundo del artículo 477.3. La mera reiteración de reglas procesales generales en la legislación autonómica no hace buena, sin más, una tal previsión (SSTC 71/1982, FJ 20; STC 173/1998, FJ 16). Esta proscripción de la reiteración o reproducción de normas procesales por el legislador autonómico (*leges repetitae*) no debe, sin embargo, extenderse a aquellos supuestos en que la reiteración simplemente consista en incorporar a la normativa autonómica, ejercida ésta en su ámbito competencial, determinados preceptos del ordenamiento procesal general con la sola finalidad de dotar de sentido o inteligibilidad al texto normativo aprobado por el Parlamento autonómico (STC 47/2004, FJ 8).

Así las cosas, la proyección de la doctrina constitucional a que acaba de hacerse referencia lleva a concluir que la dirección seguida por el Anteproyecto en este aspecto no se opone a los parámetros establecidos por la doctrina constitucional para validar las prescripciones establecidas por la norma autonómica en los apartados 1 y 3 del artículo 4 del Anteproyecto.

SÉPTIMA.- Abundando en lo anterior, el artículo 4 del Anteproyecto no contiene mención alguna al requisito de la antigüedad de la norma al que se refiere el tercer inciso del artículo 477.3 de la LEC. Este requisito, estatuido para aquellos recursos de casación de los que deba conocer el Tribunal Supremo, se ha de entender matizado por lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 477.3 de la LEC, que en concreto disciplina las peculiaridades del interés casacional cuando el recurso de casación verse sobre normas de Derecho especial de la Comunidad Autónoma y, en consecuencia, del mismo deban de conocer los Tribunales Superiores de Justicia. La eliminación del requisito temporal que establece el artículo 477.3, primer párrafo, no supone novación alguna respecto de la normativa prevista en la propia LEC. La tesis que se hace valer queda también corroborada por lo dispuesto en el artículo 483.3º, párrafo segundo de la LEC, que a diferencia de lo previsto en el párrafo primero, no efectúa mención alguna a la antigüedad de la norma infringida, habida cuenta que se limita a contemplar, como motivo de inadmisión del recurso de casación del que debe de conocer el Tribunal Superior de Justicia, el hecho de que el citado Tribunal haya sentado doctrina sobre la norma discutida o sobre otra anterior de contenido igual o similar.



OCTAVA.- El apartado segundo del artículo 4 del Anteproyecto utiliza una fórmula ciertamente alambicada para establecer el reconocimiento del interés casacional de aquellos recursos en los que se invoque la contradicción existente entre los pronunciamientos de la sentencia controvertida y la doctrina jurisprudencial vigente emanada de tribunales que ejercieron jurisdicción -respecto de las instituciones del Derecho civil, foral o especial, del País vasco- con anterioridad a la asunción de la competencia sobre tal materia por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Esta disposición encierra una especialidad procesal que conduce a ampliar el ámbito de la casación foral a través de la ampliación de los elementos que sirven para configurar el interés casacional sin que se encuentre debidamente justificada por las particularidades del Derecho civil, foral o especial, vasco. La definición del interés casacional ha de gravitar ineludiblemente, de una parte, en torno al derecho material, foral o especial, aplicado o aplicable para resolver la cuestión objeto de litigio vigente al tiempo en que fue promulgada la Constitución, de cuyo artículo 149.1.8º se deriva la competencia autonómica en materia de legislación civil; y de otra parte, en torno a la doctrina jurisprudencial invocable para integrar el interés casacional que sirve de acceso a la casación, que, como tal doctrina jurisprudencial, ha de emanar de aquellos órganos jurisdiccionales que legalmente, y conforme a la configuración de la LOPJ, tiene atribuida la competencia en materia casacional, esto es, las Salas de lo Civil de los Tribunales Superiores de Justicia respecto de los recursos de casación contra resoluciones de órganos jurisdiccionales del orden civil con sede en la comunidad autónoma, siempre que el recurso se funde en infracción de normas de derecho civil, foral o especial, propio de la Comunidad y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esa atribución [artículo 73.1 a) LOPJ].

NOVENA.- En relación con el apartado cuarto del artículo 4 del Anteproyecto, la contravención entre el precepto analizado y los términos en los que el presupuesto del interés casacional es configurado en el particular régimen jurídico previsto para el recurso de casación del que deben conocer los Tribunales Superiores de Justicia, establecido en el segundo párrafo del artículo 477.3 de la LEC, resulta palmaria, toda vez que, de la literalidad de la norma anotada se desprende que, más allá del reconocimiento de interés casacional a aquellos casos en los que o bien no existe doctrina del Tribunal Superior de Justicia sobre normas del Derecho especial de la Comunidad Autónoma o la sentencia recurrida es contraria a



dicha doctrina, el prelegislador vasco pretende, con la redacción dada al apartado cuarto del artículo 4 del Anteproyecto, hacer posible la admisión de recursos de casación en los que se planteen tesis contrarias a las sustentadas por la doctrina jurisprudencial vigente y pacífica establecida por el propio Tribunal Superior de Justicia en la interpretación y aplicación del Derecho Civil vasco, lo que supone, de facto, pretender configurar el recurso de casación del que debe conocer el Tribunal Superior de Justicia del País vasco mediante un sistema de avocación o certiorari, y, en fin, como una suerte de tercera instancia, desconociendo la función exclusivamente nomofiláctica que es propia del recurso de casación. Todo lo cual, en suma, supone articular previsiones normativas que contienen especialidades no justificadas por las particularidades que caracterizan el derecho sustantivo autonómico, y al margen, por consiguiente, de los parámetros constitucionales conforme a los cuales se configura la competencia legislativa autonómica en materia procesal que se deriva del artículo 149.1.6º CE.

DÉCIMA.- El artículo 5 del Anteproyecto, contempla los supuestos de inadmisión del recurso. El contraste entre el artículo 483.2 de la LEC y el artículo 5 del Anteproyecto permite advenir que las reglas estatuidas en los subapartados 1º a 4º del artículo 5 del Anteproyecto –excepción hecha de la supresión de la referencia a la cuantía requerida como corolario de la eliminación de la summa gravaminis que lleva a cabo la norma autonómica–, no constituyen verdaderas novedades respecto de la regulación contenida en la LEC, a pesar de la afirmación efectuada en el inciso primero del precepto anotado, sino meras reiteraciones de las prescripciones establecidas en el artículo 483.2 de la ley rituaria general. Ello es así por cuanto los subapartados 1º a 4º del artículo 5 del Anteproyecto, de una parte, no suponen novación alguna respecto de la normativa prevista en la propia LEC: su relevancia y virtualidad se explican únicamente desde el contenido que la ley proyectada quiere atribuir al motivo de casación, a las resoluciones recurribles y al cauce de acceso a la casación –el interés casacional–; pero las consideraciones que con anterioridad se han hecho respecto de tales aspectos han de tener necesariamente incidencia en estos subapartados del artículo 5, en orden a concluir con su falta de justificación conforme a los parámetros constitucionales que vienen aplicándose. Y de otra parte, porque no contribuyen a clarificar, en términos que puedan reputarse necesarios, la aplicación en el ámbito del Derecho Civil vasco de las prescripciones generales establecidas en la ley procesal civil sobre los motivos de inadmisión predicables de los recursos de casación de los que deba conocer el Tribunal Superior de Justicia, por lo que la proyección de la



doctrina constitucional a la que se viene haciendo referencia en este informe aconsejaría la supresión de estos apartados.

El subapartado 5º del artículo 5 del Anteproyecto, por su parte, establece un supuesto singular de inadmisión directamente vinculado la prescripción establecida en el apartado cuarto del artículo 4 del Anteproyecto, cuya supresión se postula en este informe, por lo que su eliminación del texto del Anteproyecto deviene asimismo ineluctable.

DECIMOPRIMERA.- El artículo 6 del Anteproyecto dispone que «En todo lo no regulado en la presente Ley sigue siendo de aplicación como norma procesal general lo establecido para el recurso de casación en la Ley de Enjuiciamiento Civil». La redacción del precepto sugiere una reflexión sencilla que engarza algunas de las consideraciones expuestas en este informe: las disposiciones de la LEC son operativas sin necesidad de que la norma autonómica reafirme su aplicación al caso, máxime cuando, tal y como aquí ocurre, la previsión del artículo 6 del Anteproyecto no surge de la necesidad de esclarecer o hacer inteligible el texto del precepto, y además introduce una suerte de supletoriedad que no es conciliable con el modelo de distribución de competencias que se deriva del artículo 149.1.61 CE, como advirtió el Tribunal Constitucional en su sentencia 47/2004, de continua referencia (F J 17), por lo que resultaría igualmente aconsejable su supresión o, al menos, su reformulación.

Es cuanto tiene que informar el Consejo General del Poder Judicial

Lo precedente concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, y para que conste extiendo y firmo la presente en Madrid, a 30 de octubre de 2019

Jose Luis de Benito y Benitez de Lugo
Secretario General